**PROGRAMA PAISAJES SOSTENIBLES DE LA AMAZONIA**

**CONECTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA BIODVERSIDAD EN LA AMAZONIA COLOMBIANA**

**FINANCIAMIENTO ADICIONAL “CORAZÓN DE LA AMAZONIA”**

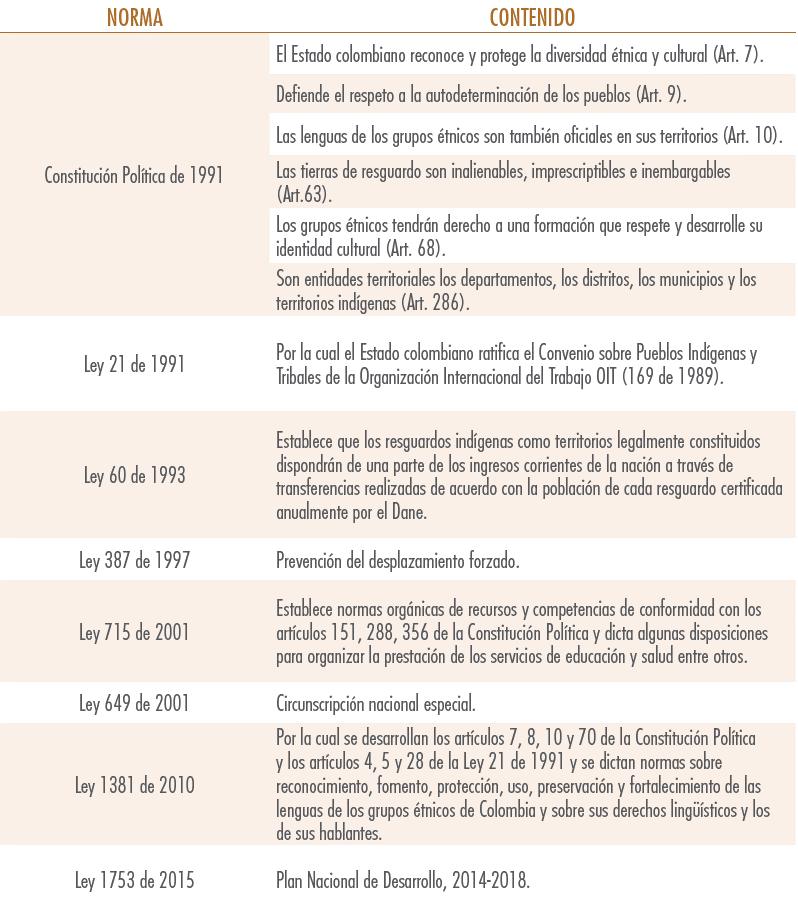
**(P144271 – TF18478)**

**Anexo 1**

**Instrumentos nacionales para la protección de los derechos individuales y colectivos**

**de pueblos indígenas**

La siguiente tabla presenta una síntesis de la normatividad colombiana a partir de 1991 para la protección de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas del país:





De manera simultánea y generando profunda incidencia en el diseño de la política pública nacional y territorial de protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, la Corte Constitucional, en el marco de sus funciones según el artículo 241 de la CP, ha desarrollado a lo largo de los años una amplia jurisprudencia. Ésta ha permitido, a través de la interpretación de la norma, la ponderación de derechos y el reconocimiento y desarrollo de medidas de protección y garantías de pervivencia de los pueblos indígenas del país. El recuento de las principales sentencias de la Corte Constitucional permite identificar las siguientes categorías de derechos sobre los que se ha generado doctrina:

|  |  |
| --- | --- |
| **Derecho** | **Sentencias** |
| A la supervivencia cultural | T-428 de 1992  T-342 de 1994  T-007 de 1995  SU-039 de 1997  SU-510 de 1998  T-652 de 1998 |
| A la integridad étnica y cultural | T-342 de 1994  SU-039 de 1997  SU-510 de 1998  T-652 de 1998 |
| A la preservación de su hábitat natural  (integridad ecológica) | T-380 de 1993  SU-037 de 1997  T-652 de 1998 |
| A la propiedad colectiva sobre la tierra habitada por la comunidad   1. Derecho a la titulación 2. Derecho a la división de los resguardos 3. Derecho a la unificación de los resguardos 4. Derecho de exclusión del territorio indígena 5. Límites al derecho de exclusión:    1. Seguridad Nacional    2. Explotación de recursos cuando no se logra acuerdo, la consulta ha sido adecuada y la intervención es justificada | T-567 de 1992  T-188 de 1993  T-652 de 1998  T-257 de 1993  SU-510 de 1998  T-652 de 1998  T-405 de 1993  SU-039 de 1997 |
| A determinar sus propias instituciones políticas (autonomía política) | T-652 de 1998 |
| A administrar justicia en su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos (autonomía jurídica) | T-254 de 1994  C-139 de 1996  T-349 de 1996  T-496 de 1996  T-523 de 1997 |
| A determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros | T-342 de 1994  SU-510 de 1998 |
| A la participación en la toma de decisiones que puedan afectarlos en su territorio | SU-039 de 1997  T-652 de 1998 |
| **Derecho** | **Sentencias** |
| A la igualdad lingüística | T-348 de 1994 |
| Al reconocimiento y protección de su medicina tradicional | C-377 de 1994  T-214 de 1997 |
| A la igualdad material (a acceder a prestaciones del Estado cuando como comunidad se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta). Entre estas prestaciones se incluyen: educación, salud, suministro de agua potable, desarrollo social | T-342 de 1994  T-007 de 1995  T-717 de 1996  SU-039 de 1997  T-652 de 1998 |

Fuente: Assies, Willem y Rosa Guillén (compiladores) (2001). El reconocimiento de los derechos indígenas: Jurisprudencia colombiana y propuestas sobre la jurisdicción indígena en Ecuador y Bolivia. El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Rurales. Michoacán, México.

En el marco del Sistema Internacional, como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe un amplio espectro de normas[[1]](#footnote-1) que ha sido reconocida y adoptada por Colombia. Especial mención por su relevancia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas merecen los siguientes casos:

* La ratificación, mediante la Ley 21 de 1991, del Convenio 169 de la OIT de 1989, instrumento normativo que según el artículo 93 de la Constitución Política hace parte del bloque de constitucionalidad.[[2]](#footnote-2)

Al adoptar este Convenio, el Estado colombiano ampara el derecho que les asiste a las personas, comunidades y pueblos indígenas a definir y decidir sus prioridades en los asuntos que afecten sus vidas, usos, costumbres, instituciones, territorios y su desarrollo, así como a participar en la formulación, adopción, ejecución y evaluación de planes, programas o proyectos que puedan afectar su integridad física, cultural y territorial.

Dada la situación extendida de desventaja y marginalidad en que se encuentra la población indígena, el Convenio 169 determina la necesidad de que los Estados adopten las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados[[3]](#footnote-3). Estas acciones afirmativas deben responder a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados y repercutir positivamente en la superación de la discriminación. Igualmente, deben garantizar que los pueblos indígenas se beneficien en forma igualitaria en la sociedad nacional y que de esta manera, puedan desarrollar su identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones, de acuerdo con sus propias aspiraciones.[[4]](#footnote-4) Para que sea eficaz en el propósito buscado, dicha participación debe ser colectiva, libre y consciente.

* La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007, adoptada por Resolución 61/295 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se constituye como el marco orientador al momento de formular o modificar políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas.

En este documento se abordan los derechos y libertades; el mantenimiento y el desarrollo de características e identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y etnocidio; los derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones educacionales; la propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales indígenas; la protección de la propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales, incluidos la caza, la pesca, el pastoreo, la recogida de cosechas, la explotación forestal y los cultivos; la protección del ambiente; la participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados, en particular, en cuestiones que pudieran afectar las vidas y destino de los pueblos indígenas; la libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales; los contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales, y la observación de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas. La declaración también prevé procedimientos justos y mutuamente aceptables para resolver las controversias entre los pueblos indígenas y los Estados, entre los que figuran procedimientos tales como las negociaciones, la mediación, el arbitraje, los tribunales nacionales y los mecanismos internacionales y regionales de examen y denuncia con relación a los derechos humanos.[[5]](#footnote-5)

Por último, es vital mencionar el artículo 264 de la Constitución Política, en el cual se reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas su facultad para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. La Corte Constitucional en su sentencia C-139 de 1996[[6]](#footnote-6), en su análisis sobre los elementos centrales de la jurisdicción indígena, estableció los siguientes referentes:

* La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias.
* La potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios.
* La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley.
* La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.

En consecuencia, las normas contenidas en lo que los pueblos indígenas denominan el Derecho Mayor, la Ley de Origen o la Ley Natural, son formalmente vinculantes y rigen dentro de las jurisdicciones territoriales de los pueblos indígenas.

En armonía con los anteriores postulados, las autoridades ambientales, con Parques Nacionales Naturales y Corpoamazonia a la cabeza, han avanzado en el desarrollo de principios y procedimientos para fortalecer el reconocimiento y las relaciones con los pueblos indígenas. Como punto de partida se definieron los objetivos de conservación para el país de la siguiente manera[[7]](#footnote-7):

* 1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica.
  2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano.
  3. Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración social de la naturaleza.

La alta diversidad étnica, y la importancia relativa que tiene la presencia de pueblos y territorios indígenas en la Amazonía, han hecho que desde Parques Nacionales Naturales y CORPOAMAZONIA se estén desarrollando importantes avances conceptuales y metodológicos en búsqueda de dar un rol protagónico y activo a los pueblos indígenas dentro de las estrategias de conservación. Es así, como junto con las características biofísicas presentes en los territorios indígenas, el factor de gobernabilidad asociado a las estructuras de gobierno propio, la relación desde la cultura con la naturaleza, el conocimiento del entorno y los mecanismos regulatorios, se convierten en factores determinantes para la construcción de alianzas para el manejo ambiental.

En particular, Parques Nacionales Naturales, desde una interpretación amplia del tercer objetivo nacional de conservación, ha desarrollado 3 líneas de acción institucional:

* Fortalecimiento de la coordinación y la gobernabilidad
* Ordenamiento ambiental del territorio
* Apoyo a la protección de la diversidad étnica y los valores de la cultura material e inmaterial asociados a la conservación de las áreas traslapadas[[8]](#footnote-8)

Así mismo, se están implementando procedimientos para fortalecer la relación con las autoridades tradicionales y políticas indígenas, que incluyen:

* Reconocimiento formal que las autoridades indígenas, autoridades públicas de carácter especial, con quienes en el marco de una relación horizontal, se establecen convenios interadministrativos y se adelanta la coordinación participativa para el manejo de las áreas protegidas.
* Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas sobre los resguardos y los territorios indígenas no titulados, ya que estos últimos hacen parte del espacio vital de las comunidades indígenas como referente ancestral o como espacios de uso material y espiritual.[[9]](#footnote-9)
* Se han puesto en marcha mecanismos de participación en consonancia con lo establecido en el convenio 169 de la OIT, incluso en las áreas que fueron creadas con anterioridad a la titulación de los resguardos.
* Se han desarrollado e implementado nuevas metodologías de manejo participativo de las áreas protegidas.
* Se reconoce la importancia de la consolidación territorial de los pueblos indígenas, por lo tanto como línea institucional se promueve y apoya la titulación, ampliación y saneamiento de resguardos.

Por su parte, CORPOAMAZONIA en el Plan de acción 2016-2019 “Ambiente para la paz” expresa su compromiso con un enfoque diferencial de la política pública ambiental y la gestión de la misma. En particular, se asume que “este enfoque permitirá comprender la compleja realidad cultural del sur de la amazonia colombiana y realizar acciones que contribuyan a eliminar todas las formas de discriminación, reconociendo la diferencia como punto de partida para implementar políticas públicas en el área ambiental, orientadas a garantizar los derechos de la población indígena, afrodescendiente y campesina. Las acciones están orientadas a lograr los siguientes objetivos:

\*Reconocer las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y demás colectividades.

\*Visibilizar situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión;

\*Develar y analizar las relaciones de poder y sus implicaciones en las condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos y personas;

\*Realizar acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y económica;

\*Actuar para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva de los derechos humanos.

Para materializar esta decisión, definió el Programa de fortalecimiento étnico que tiene por objeto “apoyar la autonomía y salvaguarda física y cultural de los pueblos indígenas contactados y en aislamiento voluntario…, en el marco de una gestión ambiental orientada a la coordinación con las autoridades tradicionales y la integración de las comunidades étnicas a la conservación de la biodiversidad del sur de la amazonia colombiana. Lo anterior con la irradiación del principio constitucional de pluriculturalidad, y el derecho fundamental de la diversidad cultural y plenas garantías de los demás derechos humanos”. Para la implementación del programa, la Corporación ha previsto las siguientes líneas de trabajo:

\*Conocimiento tradicional e iniciativas productivas asociadas al manejo de los recursos naturales

\*Ordenación y planificación ancestral del territorio con los pueblos indígenas

\*Fortalecimiento a la educación ambiental propia

\*Fortalecimiento de la participación y de los procesos organizativos de los pueblos indígenas para potencializar la incidencia de esta población en la toma de decisiones de la región y contribuir a la generación de un modelo de desarrollo amazónico.

1. Las principales medidas internacionales para la protección de los pueblos indígenas y sus territorios colectivos se recuentan a continuación:

   * Convención para la Prevención del Crimen de Genocidio (1948)
   * Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
   * Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1965).
   * Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos - Art 27 (1966)
   * Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (1957)
   * Convenio sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación de la Organización Internacional del Trabajo (1958).
   * Convención contra la Discriminación en la Educación de la UNESCO (1960).
   * Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1965).
   * Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos - art. 27 (1966).
   * Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de apartheid de las Naciones Unidas (1973).
   * Declaración de la UNESCO sobre Raza y Prejuicio Racial (1978).
   * Declaración de las Naciones Unidas sobre Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones (1981).
   * Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989).
   * Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de las Naciones Unidas (1992).
   * Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro (1992)
   * Convenio Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (1992)
   * Plan de Acción V Congreso Mundial de Parques Durban – Sudáfrica (2003)
   * Resolución del III Congreso Mundial de la Naturaleza Bangkok (2005).
   * Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005)
   * Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas (2007).
   * Declaración Congreso Latinoamericano de PNN Bariloche – Argentina (2007).
   * Resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza UICN Barcelona.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. “El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional (...).” Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-225/95, sección II.12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Convenio 169 de 1989 de la OIT, Art. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Guía aplicación Convenio 169, Pág. 36. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rodríguez, Gloria Amparo, Lina Marcela Muñoz (2009). La participación en la gestión ambiental. Colección textos de jurisprudencia. Editorial Universidad del Rosario. Bogotá; Rodríguez, Gloria Amparo (documento inédito). Reseña de los derechos y de la legislación sobre comunidades étnicas en Colombia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Citado por: Rodríguez, Gloria Amparo. Breve reseña de los derechos y de la legislación sobre

   Comunidades étnicas en Colombia. Universidad del Rosario. Documento inédito. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ver: Parques Nacionales Naturales de Colombia (2011). Ordenamiento ambiental y conservación. La experiencia de las áreas protegidas traslapadas con territorios indígenas en la Amazonia Colombiana. Bogotá. [↑](#footnote-ref-7)
8. Parques Nacionales Naturales de Colombia (2011). Ordenamiento Ambiental y Conservación: La experiencia de las áreas protegidas traslapadas con territorios indígenas en la Amazonía colombiana. Pág. 16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Parte del contenido histórico se remite al documento: IAvH, CECOIN (2005). Informe final: Caracterización actores ambientales del piedemonte andino amazónico. [↑](#footnote-ref-9)